

Vanguardia

“Francia en el Diván”

Dossier nº 83

Abril/Junio 2022

Ultramar: una Francia doliente

Jean-Christophe GAY

Universidad Costa Azul

Miembro del consejo científico de la cátedra Ultramar del Instituto de Estudios

Políticos de París

Del inmenso imperio colonial francés, que abarcaba 12 millones de kilómetros cuadrados en vísperas de la segunda guerra mundial, ya sólo queda una centésima parte, es decir, 120.000 kilómetros cuadrados. La colonización está en la base de la Francia de ultramar, y el modo en que se explotó el imperio colonial en beneficio de la madre patria y sus colonos sigue teniendo importantes consecuencias en el plano humano y económico. La herencia colonial varía según los lugares, pero en todas partes está marcada por la ambigüedad de una descolonización sin independencia, combinada con una sujeción económica y un asistencialismo, todo lo cual se refleja en el topónimo "ultramar", apelación dada por un centro dominante a unas periferias dominadas.

Territorios diversos

La Francia ultramarina está hoy poblada por 2,8 millones de habitantes, es decir, el equivalente de Galicia. La forman doce entidades con estatus y europeos diferentes: las más conocidas son las llamadas "cuatro antiguas colonias", porque Francia tomó posesión de ellas en el siglo XVII; se convirtieron en departamentos de ultramar (DOM, por sus siglas en francés) en 1946 y en regiones de ultramar (ROM) en 1982. Al igual que las Canarias, son regiones ultraperiféricas (RUP) integradas en el espacio comunitario y beneficiarias de los fondos estructurales. Las tres "islas del azúcar" (Guadalupe, Martinica y La Reunión), así como la Guyana, tienen una historia común marcada por la esclavitud hasta su abolición en 1848 y la asimilación con la departamentalización en 1946. Esas sociedades criollas tienen un total de 1,9 millones de habitantes, es decir, dos tercios de la población ultramarina francesa. La Guyana es la entidad más grande, con una superficie equivalente a la de Andalucía.

Ese conjunto, cuyos estatus han divergido de modo reciente, se completa con una serie de colectividades diversas, entre las cuales se encuentran Mayotte, convertida en DOM en 2011, y otras colectividades de ultramar (COM) asociadas sólo a la Unión Europea bajo la

forma de países y territorios de ultramar (PTU), como Nueva Caledonia, Wallis y Futuna, la Polinesia Francesa o San Pedro y Miquelón. Las islas deshabitadas o sin población permanente, como las Tierras Australes y Antárticas Francesas (TAAF) o Clipperton, completan ese conjunto heterogéneo y disperso que proporciona a Francia la segunda Zona Económica Exclusiva (ZEE) más grande del mundo (10 millones de kilómetros cuadrados), por detrás de Estados Unidos, pero por delante de Australia y Rusia. Los territorios de ultramar permiten a Francia estar presente en todos los grandes océanos. De modo anecdótico, hacen que Francia sea el país con más horas legales del mundo (13 en el invierno y 14 en el verano boreales).

Evolución demográfica

Estos territorios tienen una dinámica demográfica cada vez más contrastada. Por un lado, en algunos territorios, como Martinica y Guadalupe, la población disminuye debido al envejecimiento acelerado, una tasa de fecundidad inferior a la de la metrópoli y un saldo migratorio negativo. En cambio, la Guyana francesa y Mayotte experimentan una explosión demográfica debido a la inmigración ilegal incontrolada. La población guyanesa se ha multiplicado por diez en unos sesenta años, y la de Mayotte por doce. En las Antillas francesas se cierran clases, mientras que en Mayotte los niños asisten a la escuela por la mañana o por la tarde a causa de la falta de edificios.

Las consecuencias de la colonización y la esclavitud están muy vigentes, con desigualdades espectaculares sin parangón en la metrópoli. El color de la piel sigue siendo un factor determinante para entender semejante situación. La población ultramarina es más vulnerable que la metropolitana, pues sufre problemas de salud más frecuentes (diabetes, obesidad, hipertensión, drogadicción y alcoholismo, etcétera) y un mayor grado de violencia (inseguridad vial, robos, asesinatos, violaciones, incestos, etcétera). La condición de las mujeres es peor que en la metrópoli; entre otras cosas, la monoparentalidad se ha convertido en un fenómeno social masivo en las Antillas (41% en Martinica). Entre las lacras económicas y sociales, una de las principales es el paro, con tasas que duplican o triplican las metropolitanas en las Antillas o La Reunión. El PIB per cápita es inferior en más de un tercio. Por ejemplo, en 2021, la riqueza creada per cápita fue en La Reunión un 37% menor que en la metrópoli. Más de un tercio de los reunioneses se encuentra por debajo del umbral metropolitano de pobreza, frente al 14% en la Francia continental. En ausencia de una política redistributiva a través de diversas prestaciones sociales (prestaciones familiares, prestaciones de vivienda, subsidios para personas necesitadas, etcétera), más de la mitad de los reunioneses se encontrarían por debajo de ese umbral. Las desigualdades de los ingresos, medidas según el índice de Gini, son similares a las de Estados Unidos o América Latina, y mucho más altas que en la metrópoli.

La emigración hacia ella ha sido una respuesta a semejante precariedad. Entre 1963 y principios de la década de 1980, fue organizada por el Estado en respuesta al subempleo existente en las Antillas y La Reunión. La metrópoli experimentó un crecimiento económico muy fuerte y carecía de mano de obra en puestos fuera del alcance de los extranjeros, como algunos empleos públicos poco cualificados ofrecidos por Correos o la Asistencia pública-Administración de los hospitales de París. Junto a esa emigración administrada, se desarrolló la emigración autónoma. Ese fenómeno dio lugar a una gran comunidad "domiana" en la Francia metropolitana, en contraste con una menor presencia del resto de la Francia

ultramarina. Tras una clara disminución durante la década de 1990, la emigración se reanudó y diversificó, y pasó a afectar a toda la Francia de ultramar. En la actualidad se estima en un millón el número de personas nacidas en ultramar y de niños con al menos un progenitor natural de alguno de esos territorios. La visibilidad de esas comunidades es elevada en el deporte. Así, en la selección francesa de fútbol que ganó el Mundial de 1998 había tres antillanos (Thuram, Henry y Diomède), un guyanés (Lama) y un neocaledonio (Karembou). El Ejército es hoy una solución para muchos ultramarinos. Constituyen entre el 8 y el 10% de los reclutas, por más que los territorios de ultramar sólo representen el 4% de la población francesa. La sobrerrepresentación de los franceses ultramarinos es aun mayor en la administración penitenciaria, dado que constituyen entre una cuarta y una tercera parte de quienes estudian para convertirse en funcionarios de prisiones.

Situación económica

Esas partidas hacia la metrópoli son indicativas de los males que afligen a todas las economías ultramarinas: desempleo crónico, baja competitividad, baja productividad, alto coste de la vida, falta de competencia en el sector de la importación y distribución, fuga de talentos, grandes desigualdades salariales, etcétera. Son economías asistidas, aisladas, protegidas e infragravadas. La balanza comercial está muy deteriorada, con un comercio dominado por la metrópoli. La prosperidad es aparente falsa, pues depende sobre todo de las enormes transferencias públicas del Estado y, en menor medida, de la Unión Europea, en forma de diversas ayudas, prestaciones sociales o salarios artificialmente elevados. La sobrerremuneración de los funcionarios es una de las claves para comprender la situación económica y social. Se trata de una herencia del período colonial, cuando el gran aislamiento y las difíciles condiciones de vida impusieron un suplemento salarial para atraer a funcionarios y militares metropolitanos. Más tarde, esos complementos salariales pasaron a aplicarse a todos los militares o funcionarios, y se extendieron a la administración pública local y a determinados sectores privados, como la banca y los seguros. Van desde el 40% en las Antillas hasta más del 100% en la Polinesia Francesa, a lo cual se suman las bonificaciones y la menor fiscalidad directa. Esas diferencias oponen, por un lado, a empleados bien pagados del sector protegido y, por otro, a quienes están desempleados u ocupan empleos infrarremunerados. Para estos últimos, el coste de la vida es elevado, puesto que semejante dispositivo genera un fuerte efecto inflacionista. La cuestión de la carestía de la vida es explosiva, como demuestran las huelgas generales, los bloqueos, los disturbios, las manifestaciones masivas y las fuertes protestas en la Polinesia Francesa en 1987, en La Reunión en 1991, 2008 y 2012, en las Antillas en 2009, en la Guayana Francesa en 2017 y en Mayotte en 2018.

La carestía de la vida también está relacionada con la ausencia de competencia y las regulaciones sobre la importación, entre las cuales cabe contar el régimen de arbitrio insular en los departamentos de ultramar, un impuesto destinado a proteger la producción local. Las importaciones están muy reguladas por normas sanitarias antiguas, a veces obsoletas y anticompetitivas. La magnitud de los márgenes de beneficio se explica por la estructura oligopolística, o incluso monopolística, de los mercados, en los cuales un número muy reducido de empresas tiene el monopolio de la oferta de un bien o servicio. En las Antillas, los bekés, la población blanca descendiente de los primeros colonos esclavistas, representan menos del 1% de la población, pero dominan económicamente porque poseen la mitad

de las tierras agrícolas, una buena parte del sector de la importación-distribución (concesionarios de automóviles, hipermercados, etcétera) y los sectores agroalimentarios.

El Estado sigue inyectando cada vez más dinero para limitar las tensiones sociales y llevar a cabo "políticas de recuperación" sin poner en entredicho ese modelo económico en el que la élite blanca ha preferido transferir los beneficios de la tierra hacia el comercio de importación-exportación en lugar de hacerlo hacia el turismo. Expuesto a la competencia internacional, dicho sector turístico es la principal víctima de semejante economía de transferencias. Al no ser competitivo, no resiste la comparación con los destinos vecinos: hoteles envejecidos, excursiones o restaurantes demasiados caros, compras limitadas y caras, escasa vida nocturna, una acogida que debe revisarse mejorarse... En 2019, la Francia ultramarina sólo recibió 2,5 millones de turistas, de los cuales más de la mitad viajaron a las Antillas. La mayor parte de los turistas que visita los territorios de ultramar procede de la metrópoli. La actividad cruceística es muy limitada.

Aunque no cabe sino constatar unos innegables progresos en muchos ámbitos, con poblaciones mejor educadas, mejor atendidas o más cualificadas, es de lamentar el mantenimiento de organizaciones económicas o sociales forjadas en la época de la colonización, como la agricultura orientada a la exportación en los departamentos de ultramar o un sistema escolar demasiado calcado al de la madre patria en el que se desatienden muy ampliamente las lenguas maternas de las poblaciones locales. No habiendo realizado ninguna reflexión sobre el futuro de la Francia ultramarina, el Estado tampoco ha emprendido ninguna una reforma en profundidad desde 1946. Hizo gala de Demostró su improvisación en 2011 con la departamentalización de Mayotte, una conversión mal preparada y mal dirigida con consecuencias económicas muy mal controladas. La revisión constitucional de 2003 permite a cada entidad de ultramar elegir su estatuto; sin embargo, los habitantes de Martinica y Guayana rechazaron en 2010 el aumento de la autonomía, temiendo perder las ganancias sociales de la departamentalización. Ese ejemplo muestra la ambigüedad de la relación entre las poblaciones de ultramar y el Estado francés, que es a la vez denigrado e invocado siempre como recurso; especialmente, en Martinica y Guadalupe, donde el violento movimiento de protesta contra la vacunación y el pasaporte sanitario, en noviembre y diciembre de 2021, pusieron de manifiesto una identidad colectiva construida en oposición a la metrópoli. El fracaso estatal en el asunto del suministro de agua potable, con una infraestructura que se encuentra en muy mal estado, y el escándalo sanitario de la clordecona (un producto fitosanitario utilizado en los bananales y que ha contaminado a la inmensa mayoría de la población gracias a sucesivas exenciones pese a estar prohibido desde hace tiempo en Estados Unidos y en la Francia continental) sólo han servido para avivar las heridas de la colonización y la esclavitud. La asimilación mucho más aceptada en la isla de La Reunión ilustra que cada sociedad de ultramar es específica.

El caso de Nueva Caledonia

Nueva Caledonia, con un estatus sin igual, excepcional y transitorio, es el único territorio ultramarino lanzado a una dinámica de autodeterminación desde el periodo insurreccional de la década de 1980, con un deseo de la gran mayoría del pueblo autóctono canaco de conseguir la independencia. Tras los Acuerdos de Matignon (1988) y Numea (1998), el Estado se comprometió con el desarrollo económico y el reequilibrio de territorios y

competencias entre las diferentes comunidades mediante la organización de un plebiscito de autodeterminación en 1998, aplazado durante veinte años. Como la Polinesia Francesa, Nueva Caledonia goza de un amplio grado de autonomía con importantes transferencias de competencias, y está dotada además de su propio poder legislativo. La ciudadanía neocaledonia ofrece prioridad en la contratación y el acceso a un "cuerpo electorado especial" en las elecciones provinciales. Semejantes dispositivos sólo pueden ser transitorios desde el punto de vista de la constitución francesa y los convenios europeos. Se han celebrado tres referéndums de autodeterminación en 2018, 2020 y 2021. Los dos primeros, con una participación muy elevada de un cuerpo electoral específico y restringido, rechazaron la independencia por un 56,7% y un 53,3% respectivamente. El tercero, organizado el 12 de diciembre de 2021, fue boicoteado por los independentistas; principalmente, a causa de la pandemia de la covid-19, muy letal en Nueva Caledonia en septiembre-octubre de 2021. El no ganó por un 96,5%, pero con una abstención del 56,5%. Aunque válido en términos jurídicos, este último referéndum no lo es en términos políticos. Nueva Caledonia se encuentra de nuevo en un punto muerto tras más de treinta años de un proceso político que no ha conseguido atenuar la división entre independentistas y no independentistas. La instrumentalización del tercer referéndum en el debate sobre la creciente influencia de China en el Pacífico y su apetito por el níquel de Nueva Caledonia demuestra que las consideraciones estratégicas siguen pesando en la relación entre la metrópoli y sus territorios de ultramar.

Traducción: Juan Gabriel López Guix